

Reconstrucción: gremios priorizan inversión y empleo y ven trabas en permisología y carga tributaria

» Los distintos sectores advirtieron que su efectividad dependerá de la ejecución y de reducir barreras estructurales.

La discusión del proyecto de ley de Reconstrucción Nacional tomó forma desde el jueves que comenzó a debatirse en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

La iniciativa, ingresada con suma urgencia, combina medidas tributarias, laborales, regulatorias y de inversión, con un foco especial en las regiones más afectadas por emergencias recientes.

Con todo, desde el mundo empresarial, la construcción, el comercio, la agricultura, la salmicultura y las pymes coincidieron en un diagnóstico general: el proyecto contenía señales positivas, pero su efectividad dependería de la capacidad de desterrar inversiones, reducir la burocracia y entregar certezas regulatorias.

A partir de ahí, cada sector puso el acento en sus propias urgencias. Las respuestas también evidenciaron un punto en común: la reactivación económica seguía siendo la prioridad transversal, aunque con matices sobre cómo alcanzarla y cuáles eran los principales cuellos de botella. Mientras algunos enfatizaron la necesidad de acelerar el empleo formal, otros apuntaron a problemas estructurales como la permisología o la inseguridad.

Reactivación, inversión y empleo: el eje común del empresariado

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, situó el foco en la reactivación económica como condición base para cualquier avance. "La prioridad número uno hoy es reactivar el crecimiento, lo que implica acelerar la inversión y generar más empleo formal", afirmó a Emol, destacando además que el proyecto avanzaba en materias relevantes.

En esa línea, valoró que la iniciativa incluyera incentivos y certezas. "El proyecto contiene señales en la dirección correcta, en competitividad tributaria, incentivos a la contratación y mayor certeza jurídica, que son claves para recuperar el dinamismo", sostuvo. A su juicio, el debate parlamentario debía resguardar ese enfoque.

Desde el comercio, el presidente de la CNC, José Pakomio, coincidió en el diagnóstico y apuntó directamente a la burocracia como uno de los principales obstáculos. "Creemos que las medidas que permitan desterrar



Líderes gremiales: Jiménez (CPC), Echavarría (CChC), Pakomio (CNC) y Melero (SalmonChile).

la inversión, reducir la permisología y la burocracia, reactivando la economía, son fundamentales", señaló a Emol.

Asimismo, enfatizó la necesidad de certezas. "Es clave avanzar con mayor certeza regulatoria y jurídica, que entregue confianza y estabilidad a quienes invierten y emprenden", indicó, junto con valorar herramientas como el crédito a la contratación formal.

No obstante, advirtió un flanco en la discusión: "Ahora, el desafío está en mirar también la carga tributaria".

Minería: certeza jurídica y permisos en el centro de la reactivación

Desde la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), su presidente Jorge Riesco, el foco estuvo puesto en la necesidad de generar condiciones habilitantes para transformar proyectos en inversión efectiva.

"Para Sonami, la prioridad en el sector minero es clara: fortalecer la certeza jurídica y acelerar la tramitación de permisos para transformar el interés en inversión real y oportuna", señalaron, valorando medidas del plan que apuntan en esa dirección.

Sin embargo, advirtieron que el esfuerzo debía profundizarse. "Es fundamental avanzar en normas que destraben el crecimiento, como un estatuto para inversiones de largo plazo con invariabilidad tributaria efectiva", plantearon, junto con la necesidad de dar mayor certeza frente a eventuales cambios regulatorios.

Respecto de las trabas, el diagnóstico apuntó a factores estructurales. "Las principales trabas se concentran, por una parte, en la incertidumbre regulatoria

y en la discusión de reformas estructurales que impactan directamente la competitividad", afirmaron, haciendo referencia al debate tributario.

Construcción: foco en medidas inmediatas y desterrar la demanda

Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría evaluó positivamente el proyecto, destacando tanto sus medidas de corto como de largo plazo.

"El proyecto en general nos parece súper adecuado, muy potente, prácticamente todas las medidas apuntan en la dirección correcta", afirmó.

El dirigente puso especial énfasis en las iniciativas de rápida implementación. "Entre las medidas de corto plazo hay algunas medidas muy buenas, consideramos la medida de DFL-2, de extenderlo, es una medida que es de muy rápida implementación", explicó, apuntando a su impacto en la clase media y en la reducción del stock de viviendas. También relevó el impulso a la reconstrucción en zonas específicas. "Creemos que el tema de disponer los recursos y empujar rápidamente a la reconstrucción de Viña, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Biobío y Ñuble, son medidas que tienen un impacto más local pero están muy bien focalizadas", sostuvo.

En paralelo, abordó uno de los temas más debatidos: la eventual exención del IVA a la vivienda nueva. Si bien respaldó la medida, aclaró que su efecto sería acotado. "Cuando se habla de eliminar el IVA, se instala que es un 19%, pero no es así", advirtió en radio Cooperativa, explicando

que el impacto real podría fluctuar entre 2% y 7%.

Además, alertó sobre el efecto de las expectativas en el mercado. "La gente está esperando con reticencia a comprar", dijo, por lo que insistió en acelerar la tramitación: "para que realmente ayude hay que apurar su tramitación".

Salmonicultura: burocracia y relocalizaciones como principal cuello de botella

Desde la industria salmoneera, el diagnóstico apuntó a trabas regulatorias específicas que han frenado el desarrollo del sector. El presidente de SalmonChile, Patricio Melero sostuvo que "la prioridad número uno debe ser avanzar en la simplificación efectiva de los procesos de fusiones y relocalizaciones de concesiones acuícolas".

A su juicio, ahí se concentra el principal problema. "Es precisamente en este ámbito donde hoy se concentran las mayores trabas", afirmó, apuntando a una burocracia que ha impedido avances concretos. "Actualmente, estos procesos de relocalización enfrentan una burocracia excesiva y una complejidad normativa que han impedido su funcionamiento, de las cuales solo se han aprobado dos en los últimos 16 años", advirtió, subrayando el rezago del sistema.

En la misma línea, la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, enfatizó la importancia de medidas de impacto inmediato. "La prioridad es avanzar en aquellas medidas que puedan generar efectos concretos en el corto plazo", señaló.

Además, valoró instrumen-

tos específicos del proyecto. "Las microrelocalizaciones y los ajustes cartográficos son especialmente relevantes, porque corresponden a medidas concretas, de rápida implementación y con capacidad real de traducirse en mayor productividad, empleo y desarrollo regional", indicó.

Agricultura: seguridad e incertidumbre como frenos a la inversión

Desde el mundo agrícola, el presidente de la SNA, Antonio Walker, introdujo un elemento adicional en el debate: la seguridad. "La prioridad tras el ingreso del proyecto es avanzar en seguridad. Es una condición habilitante para recuperar el crecimiento", afirmó.

El dirigente advirtió que el aumento de delitos en zonas rurales había tenido efectos directos. "En los últimos años, el aumento de delitos en campos y parcelas ha deteriorado la vida en el mundo rural, generando incertidumbre y frenando decisiones de inversión", sostuvo.

Pymes: empleo, capacitación y sensibilidad política de la reforma

Desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett puso el acento en el impacto del proyecto sobre el empleo formal. "El crédito tributario al empleo es una de las medidas más concretas y de mayor alcance del proyecto", afirmó, destacando su efecto en trabajadores de menores ingresos.

El dirigente subrayó la magnitud del instrumento. "El Informe Financiero del propio Gobierno estima que esta medida tiene un costo fiscal de \$668 mil millones solo en el primer año", señaló, destacando su relevancia para las pymes.

También valoró las medidas en vivienda, en un contexto de crisis sectorial. "La exención temporal de Iva a la primera venta de viviendas apunta en la dirección correcta para desterrar ese mercado", indicó, vinculándolo con la reactivación de proveedores y subcontratistas.

Sin embargo, advirtió varios focos de tensión. "Principalmente en la rebaja del impuesto corporativo a las grandes empresas es políticamente la parte más sensible", sostuvo.

Asimismo, cuestionó la eliminación de la franquicia Sence.

Emol